

Infonavit cedió su marca

Colocado en la ruta del escándalo el pago de 4 mil 800 millones de pesos otorgado por el Infonavit a la firma privada Telra Realty para finiquitar convenios de colaboración en materia de movilidad hipotecaria, lo cierto es que el monto resultó barato frente a lo que se había pactado. La ola la levantó el que el firmante de los documentos, Alejandro Murat, ex director del organismo y hoy gobernador de Oaxaca, haya externado su extrañeza por el pago.

Según ello, la actual administración encabezada por David Penchyna había actuado en forma irresponsable. Su punto de apoyo, en tal caso, era que los convenios se habían firmado con el aval del Consejo de Administración. El problema es que a la firma de los papeles se extralimitó con creces el mandato de éste. Bajo el marco de éstos, por ejemplo, el Infonavit perdía el uso de su marca y de todos los derivados, que podrían usarse discrecionalmente por la firma para efectos de promoción.

Y aún más: Telra se convertía en titular de los derechos de propiedad intelectual de los programas y sistemas; la firma, en paralelo, tenía la exclusividad sobre las mejoras, variantes y evoluciones de los programas de movilidad, abierta la posibilidad de que un trabajador pudiera cambiar de casa sin haber cubierto la totalidad de la que había sido objeto del crédito. Aunque Telra tenía marcado un periodo de exclusividad, la extinción de éste no implicaría la pérdida de la propiedad intelectual e industrial respecto al programa de movilidad.

En la cumbre del entreguismo, el escenario no permitía a empleados y funcionarios del instituto acceder a la plataforma informática durante el periodo de exclusividad... Pública, Trabajo; además de organismos empresariales como la Coparmex, la Concamin y oficiales como la Comisión Nacional de Vivienda, determinaron que lo pactado, bajo los términos establecidos, afectaba el interés público, ordenando su cancelación.

La exposición de motivos hablaba de permitirse a un particular realizar tareas propias del instituto, afectarse el ejercicio del derecho de los trabajadores a una vivienda digna, además de haberse incumplido los alcances de lo autorizado, y colocarse a un tercero en opción a lograr jugosos resultados financieros en detrimento del organismo y sus afiliados. El caso es que a bote-pronto Telra le notificó al instituto su no aceptación a la cancelación, pero aceptando participar en mesas de negociación al amparo de la figura de mediación existente desde 2005.

El arranque hablaba de la posibilidad de demandar al Infonavit por daños y perjuicios, cuyo monto podría ascender a 16 mil 600 millones de pesos... de entrada. Colocado en la mesa como plazo final para llegar a un acuerdo extrajudicial el 30 de agosto de 2017, justo en el límite se aceptó que se cubriera un monto de daños y perjuicios de 4 mil 800 millones. El cálculo del despacho externo hablaba

de daños al instituto por 7 mil 600 millones... al margen de la creación de un monopolio, sin licitación al calce, de todas las operaciones en materia de movilidad hipotecaria, cobrándole al derechohabiente una comisión de 10%. Naturalmente, de no haberse frenado el tráiler, el nuevo gobierno habría encontrado un esqueleto de mamut en el closet. La pregunta es si se le fincarán responsabilidades a Alejandro Murat, o el asunto se dejará al olvido.

Fórmula antipobreza. Bajo el título de “Soluciones Empresariales para la pobreza”, en los primeros días de octubre se llevó a cabo la edición 21 de la Semana Internacional del Executive MBA, a la que acuden representantes de las 20 mejores escuelas de negocios del planeta. El anfitrión fue el IPADE Business School, que encabeza Rafael Gómez Narro. En el planteamiento de alternativas para modelos de negocios exitosos en el combate a la pobreza estuvieron Gustavo Pérez Berlanga, director de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la cadena de restaurantes Toks, y Mario Silar, director general del European Business Ethics Network.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Octubre 9 del 2018

Inegi y Banxico. La importancia de la autonomía

Paul Romer, ganador del Premio Nobel de Economía 2018, junto con William Nordhaus, fue noticia a inicios de este mismo año cuando renunció al Banco Mundial. Resulta que Romer era el economista en jefe del Banco Mundial, pero renunció a su cargo porque de acuerdo con este experto, este organismo mundial había manipulado sus estimaciones económicas para perjudicar al gobierno de Michelle Bachelet en Chile. Este escándalo, que pasó un poco de noche a principios de año, regresa con fuerza porque el entonces denunciante recibe ahora el premio más destacado al que puede aspirar un economista.

Claro que debe ser tema de debate que diferentes instancias obligadas a la imparcialidad se presten a la manipulación de las cifras para causar efectos políticos. Y si eso ocurrió en el Banco Mundial, debe haber un replanteamiento de raíz para evitar esa manipulación. Pero esa es una tentación muy común en los ámbitos locales. La manipulación estadística es una de las primeras armas que utilizan muchos gobiernos para evitar los controles y para perpetuarse en el poder.

En Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas acompañaba con datos manipulados al régimen bolivariano hasta que la quiebra de esa economía provocó que esa instancia dejara de publicar estadísticas, hace casi cinco años. No tenían ni dinero ni credibilidad para mantener su labor. En México, desde hace 10 años el seguimiento estadístico es autónomo, lo que ayuda a la credibilidad de las cifras y por lo tanto a la toma de decisiones.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene 10 años de autonomía y si bien no ha estado ajena a cuestionamientos, como aquel pleito estadístico de la medición de la pobreza que se aventó con el Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social, la realidad es que goza de credibilidad. Ahora, es un hecho que una buena carrera puede terminarse con un tropezón. Por eso es muy bueno que en su décimo aniversario en el Inegi tengan claro que la información que generan debe responder exclusivamente a cuestiones técnicas y no a grupos de interés. Es un refrendo fundamental.

La manipulación informativa que padeció este país en los años 70, 80 y 90 permitió a esos gobiernos despedazar la economía desde la oscuridad. Fue hasta la segunda mitad de los 90 cuando la transparencia y autonomía de gestión del Banco de México, después del Inegi y a la par de los propios medios de información redujeron radicalmente los márgenes de manipulación macroeconómica. Otras autonomías, como la del órgano electoral, cerraron la brecha al manejo discrecional de la vida pública mexicana.

Pero falta. Hay mucho por avanzar, por ejemplo, en la información disponible de los manejos presupuestales a todos los niveles. Ahí seguimos en la ceguera total, porque los organismos que deben vigilar esos recursos siguen siendo dependientes de los poderes Ejecutivo o Legislativo y ni hablar del caparazón del Poder Judicial. Pero en materia del manejo macro, el éxito es del tamaño del buen trabajo del Inegi y del Banco de México.

Ni un paso atrás a las autonomías que podrían ser vulneradas desde la voluntad mayoritaria del Congreso, pero también pueden sufrir estragos a través de caballos de Troya. La inclusión de personajes que sirvan a intereses particulares en esos organismos autónomos puede abrir la puerta a las tentaciones del poder absoluto.
ecampos@eleconomista.com.mx